

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **ADRIANA MARÍA NARANJO SALAZAR**
Demandados : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**
Radicado : **05001 31 05 001 2019 00247 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial -.
Decisión : Confirma decisión condenatoria de Primera Instancia
Sentencia No : 309

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se **declare** la nulidad de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por COLPENSIONES y la

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia; que la demandante presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y fecha de estructuración el 16 de enero de 2018; se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común, retroactivo pensional, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación, costas procesales, condenas ultra y extra petita.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que la demandante se encuentra afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, entidad que emitió dictamen el 9 de febrero de 2018, asignándole el 39.82% de pérdida de capacidad laboral (PCL) de origen común, estructurada el 8 de febrero de 2018; por su parte, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia mediante dictamen del 11 de octubre de 2018, le asignó el 44.93% de PCL y fecha de estructuración el 8 de febrero de 2018, de origen común. La demandante acudió ante la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia el día 8 de noviembre de 2018, donde se determinó que cuenta con el 56.25% de PCL y fecha de estructuración el 16 de enero de 2018, de origen común. Reclamó pensión de invalidez el día 20 de marzo de 2019, sin que recibiera respuesta a la fecha de presentación de la demanda.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES mediante apoderado judicial, aceptó lo referente a los dictámenes emitidos; se opuso a las pretensiones formuladas y propuso en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez e intereses moratorios, inexistencia de prueba idónea para

controvertir el dictamen, cobro de lo no debido, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación indexada, pago, buena fe, innominada.

El apoderado de la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** admitió la calificación de pérdida de capacidad laboral, se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones validez del dictamen emitido, ajustado al manual único de calificación de invalidez, inexistencia de la obligación demandada, buena fe, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar, estado clínico que pudo variar después del dictamen de la Junta.

Sentencia de Primera Instancia:

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 21 de agosto de 2021, **declaró que la demandante causó la pensión especial de vejez anticipada por invalidez** conforme al Parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003; **condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar** la suma de **\$4.633.483** por concepto de **retroactivo pensional**, causado **desde el 27 de febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2021**; continuar pagando la mesada pensional en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, sin perjuicio de los descuentos en Salud; indexación sobre las mesadas reconocidas y causadas hasta la inclusión en nómina de pensionados; **absolvió de las pretensiones referentes a la nulidad del dictamen y del reconocimiento de pensión de invalidez**; condenó en costas a la demandante, fijando agencias en derecho en cuantía de \$450.000 a favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia; sin costas a cargo de COLPENSIONES.

Recurso de Apelación apoderado de la demandante:

En cuanto no se declaró la nulidad del dictamen emitido por COLPENSIONES y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, donde la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%; sostiene que con la experticia de la IPS de la U de A. la demandante cuenta con el 56.25% de PCL estructurada el 16 de enero de 2018, dictamen que fue sustentado por el galeno ponente y fue emitido conforme al Decreto 1507 de 2014 para lo cual tuvo en cuenta las deficiencias por enfermedad del tejido conectivo que involucra el sistema osteo muscular y existen también desviaciones articulares; el perito tuvo en cuenta la historia clínica, donde aparece poliartritis, artralgiás, dolor y desviación articular, deformidades, rigidez matinal, lo que demuestra más del 50% de los síntomas y signos descritos en la tabla 14.15 del citado Decreto; los dictámenes controvertidos no incluyen el síndrome de túnel carpiano, incluida en el dictamen de la IPS Universitaria; tampoco tuvieron en cuenta la clase III pues le asignan la clase II, ni la enfermedad de cuello uterino no tenida en cuenta por no ser reproductiva para la fecha y no causaba restricción. Solicita se acoja el dictamen emitido por la IPS Universitaria con PCL superior al 50% con fecha de estructuración el 16 de enero de 2018, teniendo derecho a la pensión de invalidez e intereses moratorios o indexación.

Recurso de Apelación apoderada de COLPENSIONES:

Solicita se revoque la condena impuesta en Primera Instancia, ya que no se agotó la reclamación administrativa respecto a la pensión especial de vejez anticipada, la demanda se circunscribió a establecer la nulidad de los dictámenes emitidos

por las entidades accionadas y reconocimiento de pensión de invalidez, tampoco se incluyó en la fijación del litigio la pensión de vejez; la demandante cumplió los requisitos de edad y semanas en el transcurso del proceso, situación que pone en desventaja a COLPENSIONES ya que no tuvo oportunidad de pronunciarse; los hechos debieron debatirse en el proceso y la pensión anticipada de vejez no fue incluida en el proceso.

Alegatos de conclusión:

La apoderada de COLPENSIONES reiteró argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y al sustentar el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación** y se conocerá en **Consulta** en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y Providencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia AL2912 del 11 de julio de 2018 Radicación 68716, AL469 del 3 de febrero de 2016 Radicado 71896, STL-7382 del 9 de junio de 2015 Radicado 40200, M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si hay lugar a dejar sin efectos los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por COLPENSIONES y la Junta Regional de Calificación de Invalidez, dándole validez a la valoración del Médico José William Vargas Arenas y con base en éste, estudiar si la demandante cumple los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común. En caso de mantenerse la decisión recurrida, se revisará si la *a quo* se encontraba facultada para imponer condena por concepto de pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial. En favor de COLPENSIONES se revisará en Consulta las demás condenas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

1. En lo referente a que se declare la nulidad de los dictámenes emitidos por COLPENSIONES y la Junta Regional de Calificación de Invalidez, tenemos que:

No es objeto de discusión en esta segunda instancia, que **COLPENSIONES emitió dictamen el día 9 de febrero de 2018, asignándole a la demandante el 39.82% de PCL de origen común, con fecha de estructuración el 8 de febrero de 2018**

que corresponde a la *valoración por medicina laboral*, teniendo en cuenta los diagnósticos *trastorno mixto de ansiedad y depresión, osteo artrosis erosiva, hipertensión esencial primaria, hipotiroidismo no especificado* (fls 33 a 38). Con el fin de dirimir la controversia ante la inconformidad presentada por la señora Adriana María, la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** emitió dictamen el 11 de octubre de 2018, asignándole el **44.93% de PCL de origen común**, manteniendo como **fecha de estructuración el 8 de febrero de 2018**, teniendo en cuenta los diagnósticos *osteo artrosis erosiva, hipertensión esencial primaria, hipotiroidismo no especificado, leiomioma del útero sin otra especificación, otras gastritis, trastorno mixto de ansiedad y depresión*, anotando que “...no se incluye la patología *síndrome del túnel del carpo bilateral* en razón a que no se aporta electro diagnóstico que permita evaluar el estado de la patología después del manejo quirúrgico recibido...” (fls 40 a 44).

Sobre el tema objeto de apelación, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, **establece que corresponde** al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones - **COLPENSIONES**-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP hoy ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, **determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose controvertir ante las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional y nacional;** indicando expresamente que **contra dichas decisiones, proceden las acciones legales.**

En lo referente a la **contradicción del dictamen de pérdida de capacidad laboral**, la Sala de Casación Laboral de la

H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL1044 de 2019 Radicación 68074, reiterando CSJ SL5280-2018 y CSJ SL16374-2015, **indicó que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es prueba solemne**, de modo que **puede ser controvertido ante los Jueces del Trabajo**, sin que sea un requisito de procedibilidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez realizar el trámite ante dichas Juntas, ya que **la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, donde puede solicitar una nueva valoración**, para que sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada; veamos:

“...la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas.

(...)

Así las cosas, el ejercicio de los recursos previstos en el decreto en cita contra los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, no es el único medio con que cuenta la parte contra la cual se pretenda hacer valer, para oponerse y disentir de su contenido, puesto que también puede controvertirlo ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, puede hacer uso de la solicitud de una nueva valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada...”.

En **Sentencia SL877 de 2020**, señaló que **los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, son prueba, no solemne**, con los cuales se puede acreditar el grado de la pérdida de capacidad laboral, su origen y fecha de estructuración, pero que al no exigir la ley determinado elemento de persuasión para acreditar la pérdida de capacidad laboral, **debe respetarse la libertad probatoria de la que están asistidos los juzgadores de instancia**; explicando que **si el Juez**, para definir una determinada controversia, **se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad**, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste, de conformidad con los

artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

En el asunto bajo estudio, luego de comparar la sustentación de los diferentes dictámenes obrantes en el proceso, emitidos por COLPENSIONES, la Junta Regional de Calificación de Invalidez y el aportado con la demanda elaborado por el Médico José William Vargas Arenas, la Juez de Primera Instancia concluyó que este último está sobrevalorado en lo que tiene que ver con la *deficiencia por enfermedades del tejido conectivo que involucra el sistema osteomuscular*, a la que asignó como clase III, sin que exista evidencia de contar con el 50% de síntomas a que refiere la norma, mientras que las demandadas la ubicaron en clase II; **también encontró que se incluyeron otros diagnósticos sin sustento**, como el *síndrome del túnel carpiano* ya que fue intervenida quirúrgicamente en el año 2013 para liberación del tendón y no hay consulta posterior y otras pruebas diagnósticas por este concepto; dejando incólume el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral que en la sustentación del recurso de apelación, el apoderado de la demandante nuevamente realiza una lectura de los parámetros consignados en los dictámenes por parte de los profesionales que valoraron la pérdida de capacidad laboral, invocando se deje sin efectos los emitidos por las entidades demandadas y en su lugar, se dé plena validez al aportado con la demanda, sin exponer o sustentar razones suficientes que conlleven a apartarse del razonamiento realizado por la Juez de Primera Instancia, que en un estudio detallado de sus componentes, encontró sobrevalorado

el diagnóstico *enfermedades del tejido conectivo que involucra el sistema osteomuscular* y ausencia de soporte clínico para *síndrome del túnel carpiano*, como se detalló en acápite anterior.

Siendo pertinente recordar que conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ante la existencia de múltiples dictámenes de pérdida de capacidad laboral, como ocurre en este caso, el Juez Laboral está habilitado para sustentar su decisión, en aquél que le merezca mayor credibilidad, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste, tal como lo explicó la Juez de Primera Instancia, al acoger plenamente las conclusiones de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Al respecto, el Órgano de Cierre de la especialidad Laboral en Sentencia **SL2349-2021** reiterando SL3992-2019, recordó que en la tarea de verificar el origen de la enfermedad, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral ***“...el juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones...”*** (Negritas fuera de texto).

Así mismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 232 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, conforme al cual, ***“...El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento***

en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso...” (Negritas fuera de texto).

Observándose que tanto COLPENSIONES como la Junta Regional de Calificación de Invalidez, asignaron porcentajes de PCL cercanos -39.82% y 44.93% respectivamente-, siendo coincidentes en la fecha de estructuración asignada -8 de febrero de 2018-, correspondiente a la valoración por medicina laboral, oportunidad en la que el especialista anotó: “...refiere dolor poliarticular generalizada, hombros, mano, cintura, bajo rendimiento productivo, llamados de atención. E.f.: consciente orientada ... no sinovitis, no entesitis, no puntos gatillo, no déficit motor, no requiere ayuda de aditamentos, amas de rodillas completos, no radiculopatía...”; en fundamentos rol laboral / ocupacional se consignó: “...Paciente de 51 años, operaria de confecciones independiente. Dx: osteoartrosis generalizada, depresión, tag, manejo multidisciplinario con poca respuesta con limitación para la movilidad y desplazamiento, levantamiento de cargas, para el cuidado personal como vestirse y la vida doméstica como los quehaceres y cuidado de objetos del hogar, paciente con dificultades en su desempeño psicosocial. Rol laboral: adaptado...” (fl 35); contándose con la posibilidad de interponer el recurso de apelación para que fuera revisado por la Junta Nacional de Calificación, no obstante, se aclara que su agotamiento no es obligatorio.

Pretendiéndose restarles valor probatorio a los dictámenes emitidos por entidades especializadas, para que prime el concepto del médico particular, quien consignó: “...Me aparto de los dictámenes proferidos en las calificaciones anteriores ya que para la determinación de la deficiencia por el cuadro articular ... la paciente debe clasificarse en una clase III de la tabla 14.15 del manual de calificación ... no se calificó la deficiencia por el túnel carpiano bilateral de tipo moderado...” (fl 22); sustentación que fue claramente controvertida por la Juez de Primera Instancia, exponiéndose las razones para restarle valor probatorio como ya se detalló y **dejando incólume el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez** que asignó el 44.93% de PCL de origen común, estructurada el 8 de febrero de 2018. **Conclusión**

que comparte esta Sala de Decisión Laboral, conforme a la libre formación del convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias particulares del asunto planteado, siendo ésta una evaluación emitida por **entidad especializada** en el tema de Salud Ocupacional y calificación de merma de la capacidad laboral, facultada legalmente para ello conforme al 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, de reconocida trayectoria e idoneidad; dictamen que ofrece suficiente credibilidad, donde se explica de manera detallada la evolución clínica de la paciente, con la relación de documentos, exámenes y ayudas diagnósticas tenidos en cuenta, con fundamento en historia clínica emitida por los diferentes especialistas que la atendieron.

2. Respecto a que se revoque la condena a reconocer y pagar pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial, afirmándose que no se agotó reclamación administrativa y que no fue objeto del litigio, cumpliéndose los requisitos de edad y semanas en el transcurso del proceso, situación que pone en desventaja a COLPENSIONES ya que no tuvo oportunidad de pronunciarse; nos encontramos con que:

Para imponer condena, la *a quo* explicó en términos generales, que si bien no había lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplirse los requisitos legales para ello, era procedente el estudio de la pensión especial de vejez por deficiencia física, atendiendo a que en los alegatos de conclusión, el apoderado manifestó que en el trámite del proceso la demandante había cumplido los requisitos exigidos; encontrando que conforme al dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la demandante cuenta con una

deficiencia del 28.53%, equivalente al 57.06% del total de deficiencia, superando el 50% exigido en el Parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993; cumpliendo también la edad y semanas para causar la pensión especial de vejez, con mesada pensional equivalente al SMLMV, según el ingreso base de cotización, con derecho a 13 mesadas al año.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral que si bien es cierto, la pensión especial de vejez no fue pretendida en la demanda y no fue objeto del litigio; también lo es que las entidades de seguridad tienen el deber de asesoría y buen consejo a sus afiliados, no esperar que sean éstos últimos quienes indiquen qué normas les pueden ser aplicables para el reconocimiento de sus derechos pensionales, que se constituyen en derechos fundamentales. Y la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado respecto al reconocimiento de la prestación económica en una modalidad diferente a la pretendida en la demanda, precisando que **el Juez no necesariamente debe someterse a las calificaciones que de los hechos hagan las partes o a las disposiciones legales que éstas invoquen**, pues el convocado a interpretar y aplicar la Ley es el Juzgador, a partir de los hechos acreditados y subsumidos en la norma que consagra el derecho en discusión; al respecto ver Sentencias SL 1083 de 2018 Radicado 54445, SL 20752 de 2017 Radicado 58774 y SL 6400 de 2016 Radicado 42776. Así mismo, en Sentencia SL 3707 de 2018 Radicado 50665, precisó que **en los eventos en que la parte cumpla con los requisitos para pensionarse en el trámite del proceso, debe reconocerse la prestación, sin que pueda aducirse una petición antes de tiempo** y en el caso concreto, la demandante acredita los requisitos exigidos, como se explicará a continuación.

El parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art 9° de la Ley 797 de 2003, contempla el **reconocimiento de la pensión especial de vejez** a favor de las personas que padezcan una **deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más**, cumplan 55 años de edad y hayan cotizado en forma continua o discontinua 1.000 o más semanas al régimen de seguridad social en pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.

Al respecto, la **H. Corte Constitucional en la Sentencia T-462 de 2016, reiterando T-007 de 2009, T-201 y T-665 de 2013, T-128 y T326 de 2015**, precisó que la pensión anticipada de vejez se diferencia de la ordinaria de vejez, en la medida en que la primera releva al solicitante de cumplir el requisito de edad dispuesto en el numeral 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ya que sólo **requiere acreditar 55 años de edad y 1000 semanas de cotización** al Sistema de Seguridad Social, a diferencia de la ordinaria de vejez, en la que las semanas irían aumentado hasta llegar a 1.300 al año 2015; explicó que no es necesario demostrar el origen de la pérdida de capacidad laboral del solicitante, común o profesional, pues **solo se requiere demostrar que la deficiencia es igual o superior al 50%.**

En lo relativo al **requisito de deficiencia**, la H. Corte Constitucional en **Sentencia T-007 de 2009**, señaló que junto con la minusvalía y la discapacidad, son criterios para la calificación integral de la invalidez, conforme a lo preceptuado en el **artículo 7° del Decreto 917 de 1999**; por su parte, en el **artículo 8° ibídem**, a cada uno de estos criterios se le asigna un puntaje máximo, que para la “deficiencia” es del 50%, conforme a lo cual, para la pensión especial de vejez, solo interesa que en el criterio deficiencia se acredite un

porcentaje igual o superior al 50% (del máximo que a su vez es del 50%), por lo que **debe demostrarse un porcentaje mínimo del 25%.** Criterio compartido por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en Sentencia SL1031 de 2021 Radicado 80919.

De acuerdo a lo expuesto, los requisitos para obtener la pensión anticipada de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial, son: **padecer una deficiencia igual o superior al 50% (del 50%) -sin importar su origen-, acreditar 1000 o más semanas de cotización al Sistema General de Seguridad Social y tener cumplidos 55 años de edad.**

Conforme a la prueba obrante en el proceso, la señora Adriana María Naranjo Salazar nació el 27 de febrero de 1966 (fl 48), por lo que **cumplió 55 años de edad el mismo día y mes del año 2021 y acredita 1.019,71 semanas cotizadas** en toda la vida laboral, entre el 28 de mayo 1986 y el 30 de noviembre de 2020, según historia laboral generada por COLPENSIONES el 15 de marzo de 2021 (carpeta 06); de acuerdo al dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de fecha 11 de octubre de 2018, a la demandante se le asignó una pérdida de capacidad laboral del 44.93% de origen común, estructurada el 8 de febrero de 2018, **correspondiéndole al ítem “deficiencia” el 28.53%** (fl 42).

Por tanto, es procedente **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia, en cuanto condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial; sin que por el reconocimiento se vulneren derechos fundamentales de COLPENSIONES en el

trámite del proceso, porque como quedó explicado, es viable el reconocimiento de la prestación económica cuando en el trámite del proceso se cumplen los requisitos legales para ello, estando debidamente acreditados.

En **Consulta en favor de COLPENSIONES**, se encuentra ajustado a derecho el reconocimiento del **disfrute a partir del 27 de febrero de 2021**, fecha de cumplimiento del último requisito que en este caso fue la edad de 55 años y ya contaba con más de 1.000 semanas cotizadas; con derecho a **13 mesadas** al año, por haberse causado en forma posterior a 31 de julio de 2011, conforme al Parágrafo Transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005; en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, atendiendo al ingreso base de cotización reportado por la afiliada; tal como lo dispuso la *a quo*. No operó prescripción sobre mesadas pensionales (el derecho a la pensión no prescribe), teniendo en cuenta que se causaron en el trámite de este proceso. Revisado en el retroactivo pensional reconocido en cuantía de \$4.633.483, se encuentra bien liquidado hasta el 31 de julio de 2021; siendo procedente la indexación reconocida, como factor que permite compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, como consecuencia de los efectos inflacionarios.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia en todas sus partes, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

COSTAS:

No se condenará en Costas en Segunda Instancia, teniendo en cuenta que ambas partes interpusieron recurso de apelación y ninguno de ellos prosperó; conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL,** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas que por vía de Apelación se revisa y en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: **No se condena en Costas** en Segunda Instancia, según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

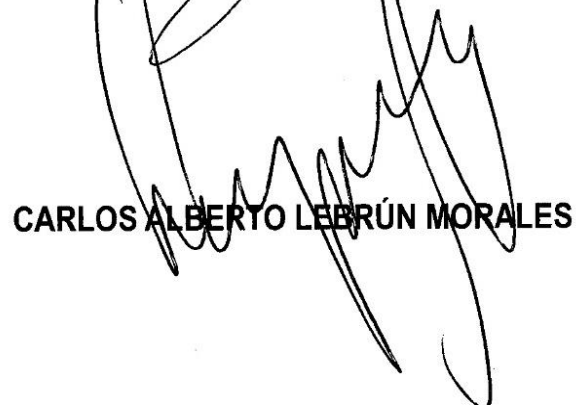
Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **ADRIANA MARÍA NARANJO SALAZAR**
Demandados : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**
Radicado : **05001 31 05 001 2019 00247 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial -.
Decisión : Confirma decisión condenatoria de Primera Instancia
Sentencia No : 309

FECHA SENTENCIA:

15 de diciembre de 2022

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy lunes 19 de diciembre de 2022 a las 8:00 Am Desfijado hoy lunes 19 de diciembre de 2022 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario